

Santiago, doce de marzo de dos mil veinticuatro.

**Vistos y teniendo únicamente presente:**

1.- Que, como lo ha sostenido previamente esta Corte Suprema, la actuación procesal del ente persecutor denominada como “reformatización”, corresponde a una institución que no se encuentra expresamente consagrada en el Código Procesal Penal, la que, por ende, resulta ajena al ordenamiento jurídico nacional —pese a ser efectivo que la misma es comúnmente utilizada y aceptada en la práctica judicial—, por lo que mal puede tener la aptitud de restringir o afectar las garantías fundamentales de los imputados respecto de quienes se pretenda llevar a cabo.

2.- Que, en este entendido es dable consignar, que la referida actuación sólo será procedente en la medida que tal comunicación no altere el núcleo sustancial de los cargos que fueron objeto de la imputación, esto es, siempre y cuando el Ministerio Público no incorpore hechos nuevos a la misma, debiendo únicamente limitarse a precisar aquellos que fueron objeto de la primitiva formalización.

3.- Que, lo anterior no obsta a que el Ministerio Público, en función de sus atribuciones y facultades legales, decida iniciar una nueva causa por hechos diversos a la formalización primitiva y, posteriormente, opte por reagrupar o separar las investigaciones.

Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Fundamental, **se revoca** la sentencia apelada de veintitrés de febrero de dos mil



veinticuatro, dictada por la Corte de Apelaciones de Chillán, en el Ingreso Corte N° 36-2024, y en su lugar se decide que **se acoge** la acción constitucional de amparo deducida en favor de Andrea del Pilar Troncoso Muñoz y José Francisco Luengo Aguilar, **dejándose sin efecto** lo obrado en la audiencia de reformatización de 13 de febrero de 2024, en los autos RIT 1.508-2022; RUC 2.200.389.194-5, del Juzgado de Garantía de Chillán, sin perjuicio de otros derechos por parte del Ministerio Público.

Regístrese, comuníquese por la vía más expedita y, una vez hecho, devuélvase.

**N° 9.110-2024.**





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., Jean Pierre Matus A., Maria Gajardo H. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, doce de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a doce de marzo de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

